

# Guerra jurídica en el golpe de Estado boliviano del año 2019: una problemática pasada por alto

## *Lawfare in the 2019 Bolivian coup d'état: an issue that has been overlooked*

Fausto Marchiaro

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

✉ fausto-marchiaro@hotmail.com

ORCID: 0000-0002-8174-8074

Recepción: 02 de abril de 2021 / Aceptación: 15 de mayo de 2021 / Publicación: 07 de agosto de 2021

### Resumen

El artículo analiza el papel desempeñado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en el golpe de Estado ocurrido en el año 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia. El tribunal, a través del reconocimiento de la doctrina del ejercicio de facto de los cargos públicos permitió acceder ilegalmente a la senadora Jeanine Añez a la Presidencia de Bolivia. El ensayo pone de manifiesto la ausencia de investigaciones acerca de esta problemática, destacando las diversas líneas de trabajo elaboradas acerca del golpe. Asimismo, indaga acerca de los procesos judiciales iniciados con la restauración de la democracia en octubre de 2020, tendientes a efectivizar las responsabilidades derivadas del asalto al poder. Por último, inscribe a las actuaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional como expresión del lawfare o guerra jurídica regional.

**Palabras clave:** Bolivia; Tribunal Constitucional Plurinacional; Golpe de Estado; Lawfare; Democracia

### Abstract

This article analyses the role performed by the Plurinational Constitutional Court in the Bolivian putsch occurred in 2019 in the Plurinational State of Bolivia. The Court, through the recognition of the doctrine of the facto government illegally allowed the senator Jeanine Añez access to the presidency of Bolivia. The essay brings out the absence of investigations about the issue, highlighting the several lines of research developed about the putsch. Moreover, inquires about the judicial processes initiated with the return of democracy in October 2020, aimed to make effective the responsibilities originated in the coup. Lastly, enrolls the acts of the Plurinational Constitutional Court as an expression of the regional lawfare.

**Keywords:** Bolivia; Plurinational Constitutional Court; Putsch; Lawfare; Democracy

## 1. Introducción

La interrupción del proceso democrático boliviano en 2019 fruto del golpe de Estado del que fuera víctima el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) y la paralela violación sistemática de Derechos Humanos iniciada por el gobierno de facto encabezado por Jeanine Añez, son problemáticas que han sido exhaustivamente analizadas por un gran cúmulo de especialistas (Curiel & William, 2019; Romano et al., 2019). En este sentido, podemos observar sendas teorizaciones acerca del lugar ocupado por los principales instigadores y protagonistas del quiebre de la institucionalidad, mostrándose lo sucedido en Bolivia como un fenómeno multicausal y heterogéneo en cuanto a responsabilidades. De este modo, las publicaciones han puesto el foco en las acciones desplegadas por las fuerzas armadas, la policía, la Organización de Estados Americanos (OEA), los comités cívicos ciudadanos de ultraderecha, los medios de comunicación, el factor geopolítico internacional, la oposición política al MAS y las masivas movilizaciones ciudadanas en contra de Evo Morales Ayma en el contexto de la crisis electoral iniciada el 20 de octubre de 2019 por falsas denuncias de fraude electoral. La tendenciosa denuncia de fraude electoral envalentonada por la OEA durante los comicios generales de octubre de 2019 fue contundentemente denunciada y desmontada (Curiel & Williams, 2019; Johnston & Rosnick, 2020).

Sin embargo, la actuación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a través del reconocimiento de Jeanine Añez como presidenta interina, eleva al organismo judicial como sujeto clave en la embestida destituyente. En abierta violación a la Constitución Política del Estado (CPE) se enroló en la infausta doctrina *de facto*, otorgándole a la senadora insurrecta un título jurídico fundado en la fuerza material de los hechos (Albert Constantineau, 1945). Por este motivo, al combinarse con novedosas *tecnologías de derrocamiento* (Carbone & Soler, 2017), el papel asumido por el tribunal andino debe considerarse como un zenit de la actual guerra jurídica regional o *lawfare*.

A su vez, restituida la democracia fruto de la victoria electoral del binomio Arce-Choquehuanca por el MAS-IPSP en octubre de 2020, se destaca el inicio de múltiples investigaciones y procesos judiciales propensos a determinar las principales responsabilidades surgidas con motivo del golpe. Así, nuevamente constatamos un olvido o sobresalto referido al estudio del rol encarado por el TCP en la crisis boliviana del 2019. En este caso, más grave aún dado que proviene de las autoridades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia.

Una comprensión integral de los acontecimientos sucedidos en Bolivia requiere poner luz sobre el lugar primordial ocupado por el Tribunal Constitucional Plurinacional y sus miembros. Ello no solamente a fin de evitar impunidad y colaborar al ejercicio de la construcción de la memoria histórica, sino sobre todo porque “La tragedia boliviana enseña con elocuencia varias lecciones que nuestros pueblos y las fuerzas sociales y políticas populares deben aprender y grabar en sus conciencias para siempre” (Borón, 2019). Revisar un hito más del *lawfare* es el aprendizaje que debemos rescatar de estos hechos y paralelamente el objetivo de este trabajo.

## 2. Metodología

En primer lugar, hemos realizado una investigación teórico-explorativa tendiente a poner en evidencia las apreciaciones mencionadas al inicio. En consecuencia, se han analizado y revisado una gama diversa de publicaciones, encuentros y foros de discusión relativos al objeto indicado. La metodología elegida ha sido de carácter interdisciplinaria, incluyendo aportes del Derecho, las Ciencias Políticas, las Relaciones Internacionales y el periodismo de investigación. Siendo nuestro objetivo una lectura situada de la crisis institucional boliviana de 2019 que evidencie protagonistas y principales problemáticas involucradas, encontramos fundamentalmente líneas de trabajo referidas al papel de:

- a) La OEA (Johnston & Rosnick, 2020).
- b) Las fuerzas armadas y la policía (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2019).
- c) Los comités cívicos ciudadanos de ultra derecha (Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano, 2019).
- d) El factor geopolítico internacional (Romano et al., 2019).
- e) La cobertura comunicacional del asunto (Correa, 2020).
- f) Las movilizaciones ciudadanas opositoras y el clima social imperante al momento de gestarse el golpe (Morales Ayma, 2020).

En un segundo momento, y encontrándonos frente a un vacío doctrinario que dé cuenta acerca de la faz judicial de nuestra problemática, recurrimos a trabajos abocados al fenómeno del lawfare referentes a experiencias similares acontecidas en nuestro continente. Sumado a ello, examinamos las actuaciones procesales y parlamentarias que dieron lugar al nombramiento de Añez y la posterior consolidación del golpe.

Ulteriormente, hemos estudiado las investigaciones y procesos judiciales iniciados con la restauración democrática destinados a hallar las responsabilidades jurídicas nacidas fruto del quiebre de la institucionalidad.

## 3. Renuncia forzada de Evo Morales Ayma y proclamación de Jeanine Añez

Con el objetivo de abordar cabalmente el proceder del Tribunal Constitucional, es menester contextualizar el espacio - tiempo en el cual se inscribió la investidura de Añez.

Las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 y las consiguientes denuncias de fraude electoral esbozadas por la OEA y los sectores opositores al proceso de cambio, iniciaron un complejo escenario en el Estado andino. Luego de tres semanas de paro y movilización desestabilizantes, recrudecimiento de la violencia política, acuartelamiento de las policías departamentales, desabastecimientos estratégicos y la “recomendación” al presidente Morales de dejar su cargo por parte del comandante en jefe de las fuerzas armadas, las máximas autoridades

del MAS renuncian por la fuerza a sus cargos el día 10 de noviembre de 2019 e inician exilios a diferentes latitudes a fin de salvar su vida y pacificar el país (Romano et al., 2019). Sumado a ello, es preciso puntualizar:

a) La Constitución boliviana exige en sus arts. 161 y 170 que la renuncia del presidente y vice sean presentadas ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, siendo dicho órgano el único competente para aceptarla o rechazarla. En este caso, las dimisiones de Evo y Álvaro García Linera no fueron solicitadas ante el Parlamento, ni dicho poder supremo se expresó acerca de lo sucedido.

b) Al momento de la crisis electoral, la representación legislativa era de 88 diputados del MAS sobre 130 y de 25 senadores sobre 36 (Órgano Electoral Plurinacional, 2015). Claramente el oficialismo contaba con amplias mayorías, superiores a las 2/3 partes de los miembros en cada uno de los recintos. Por ende, toda decisión parlamentaria debía contar con el visto bueno del masismo.

c) Ante la dimisión de los titulares del Ejecutivo, las y los legisladores masistas deciden concurrir al Parlamento a fin de repudiar las renunciaciones coactivas y nombrar nuevas autoridades interinas de conformidad a la CPE. Situación que se vio imposibilitada ante el impedimento ilegal del que fueron víctimas, al negárseles por la fuerza la entrada al Congreso (Ámbito, 2019).

d) El art. 169 de la CPE reza:

En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días.

e) Habiendo dejado sus cargos Linera y Morales Ayma correspondía asumir la presidencia interina a la titular de la Cámara Alta o en su defecto al de la Baja. Los mismos eran Adriana Salvatierra y Víctor Borda Belzu, ambos miembros del MAS-IPSP. Tanto la Presidenta de la Cámara de Senadores como su par de Diputados fueron también impelidos a renunciar a sus puestos. Tampoco aquí se cumplimentó la letra de la Constitución, a razón de que dichos actos no se oficializaron ante el Parlamento ni el órgano deliberante se expresó acerca de la validez de lo actuado.

f) Con la proscripción material del masismo en el Congreso, la senadora departamental por Beni Jeanine Añez se presentó ante el órgano legislativo en el siguiente escenario:

1) Sin quórum mínimo para funcionar la Asamblea Legislativa.

2) Acompañada de la cúpula militar y de miembros de comités cívicos como Fernando “Macho” Camacho, líder civil del movimiento insurgente (Echazú Cortéz, 2021).

3) Con una plaza Murillo (La Paz) militarizada, reprimiéndose fuertemente a movilizaciones pacíficas oficialistas que pretendían ingresar a la misma bajo la consigna “defensa de la democracia.”

Es así que, sin respetar la normativa constitucional, específicamente el art. 169, se autoproclamó “presidente interina” de Bolivia por 90 días, recibiendo personalmente de un militar la banda presidencial (Teruggi, 2019).

#### **4. El Tribunal Constitucional Plurinacional y la teoría *de facto***

La ilegal asunción de Añez contó con la certificación emitida por el máximo tribunal boliviano. Por la vía de un mero comunicado de dos fojas el TCP dio su visto bueno al golpe de Estado, reconociendo en la senadora de Beni la doctrina del ejercicio de facto de la investidura presidencial. Lo llamativo es que la instancia ante el juzgado no fue requerida, ni la persona de Añez es mencionada en el documento. De manera oficiosa buscó sellar la asunción ilegítima e ilegal a través de un razonamiento alejado del Derecho. En palabras de los supremos:

Frente a una sucesión presidencial, originada en la vacancia de la Presidencia de la República, ocasionada por la renuncia del jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no requiriéndose de Ley ni de Resolución Congresal para que el vicepresidente asuma la Presidencia de la República; sino que conforme al texto y sentido de la Constitución, el Vicepresidente asume ipso facto la Presidencia (...) cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez de la sucesión presidencial. (Tribunal Constitucional Plurinacional, 2019, p. 2)

Las conclusiones del tribunal causan estupor por diferentes motivos. Jeanine Añez no ejercía la vicepresidencia del Estado ni la comandancia de ninguna de las Cámaras del Parlamento. Es curioso que se la considere investida de dicho cargo cuando jamás órgano alguno competente la designó como tal. La simple senadora insurrecta, en el contexto parlamentario descrito, fue autonombrada sin quórum, primero como presidenta del Senado, para luego auto aplicarse el art. 169 de la CPE relativo a la sucesión. Por ende, su proceder fue doblemente nulo e ilegal al atribuirse cargos fuera del procedimiento legal.

No obstante, el Tribunal Constitucional Plurinacional hizo caso omiso de las previsiones legales a las cuales hemos hecho referencia. Ello es así en tanto para los jueces supremos la sucesión es simplemente “ipso facto” o “inmediatamente / en el acto”. Bajo esta lógica, no es exigible para el encuadramiento legal de la acefalía del cumplimiento de la normativa constitucional, sino que sólo importan los hechos por los hechos mismos.

Con dicho pronunciamiento el TCP asumió la doctrina de facto del ejercicio de los cargos públicos. Ésta hubo de ser definida como:

Un principio de derecho que (...) justifica el reconocimiento de la autoridad de gobiernos establecidos o mantenidos por personas que han usurpado la autoridad soberana del Estado y se afirman por la fuerza y las armas contra el gobierno legítimo. (Constantineau, 1945, p. 9)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina (CSJN), par y hermana del tribunal boliviano, al acuñar la mencionada doctrina en 1930 sostuvo:

El gobierno provisional que acaba de constituirse en el país (refiere al gobierno militar de José Félix Uriburu), es, pues, un gobierno de facto cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social. (Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina, 1930)

Para la doctrina de facto la fuerza se encuentra por sobre el Derecho, derivando el ejercicio legítimo de los cargos en la detentación del poder material. Dicha situación fáctica, según la CSJN, no amerita ser discutida por nadie, ni siquiera por ella en ejercicio del control de constitucionalidad. Así, título válido es aquel obtenido por medio de la fuerza, pudiéndose ejercer el cargo usurpado mientras se cuente con dicho poder y se lo haga valer. Lo mismo comprendió el tribunal boliviano al no inmiscuirse en los antecedentes que posibilitaron a Añez ser autonombraada presidenta del Senado. Dicho escenario es el propio de los autoritarios y los totalitarismos, idearios totalmente alejados de un paradigma basado en la democracia y el respeto de los Derechos Humanos.

Por otro lado, inverosímiles son los fundamentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional para legitimar la “presidencia interina”. Es así que arguyó como considerandos justificatorios de su proceder:

La grave situación política y social que atraviesa nuestro país y el vacío de autoridad que ha dejado las renuncias a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, así como de las Presidencias de las Cámaras de Senadores y de Diputados. (Tribunal Constitucional Plurinacional, 2019, p. 2)

Sorprendentemente el TCP no contextualizó el panorama en que dichas dimisiones tuvieron lugar ni su legalidad. Tampoco comentó nada acerca de su aceptación o rechazo por parte de los órganos competentes.

Sin embargo, más llamativa aún es la posición del TCP quien afirmó que la asunción de Añez tendría por finalidad “preservar el Estado Constitucional (...), el respeto de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales” (ibidem). Nada más alejado de la realidad. A los pocos días se cometerían las masacres de Sacaba y Senkata (15 y 19 de noviembre de 2019 respectivamente), hechos denunciados por la comunidad internacional y calificados como masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2019).

## 5. Restauración democrática. Juicio y Castigo

La victoria electoral del masismo en los comicios de octubre de 2020 implicó la reapertura del ciclo de transformación político, social y cultural iniciado en 2006 con la primera presidencia de Evo Morales Ayma. A los pocos días de oficializarse el triunfo, el presidente electo Luis Arce



afirmó estar indignado con la OEA y los sectores políticos, ciudadanos, castrenses y policiales involucrados en el golpe. A su vez, al ser consultado sobre la promoción de investigaciones judiciales a dichos sujetos sostuvo:

Eso ya está en manos del órgano judicial, no está en manos del Ejecutivo. Son resortes del Poder Judicial que debe avanzar en esta labor, vamos a estar pendientes de que eso ocurra, pero sin injerencia. Vamos a vigilar que los procedimientos jurídicos se den. (Arce, 2019)

Es así que podemos observar que a lo largo de los años 2020 y 2021 los organismos judiciales bolivianos comenzaron a instar diferentes procesos abocados a efectivizar las responsabilidades legales originadas con motivo del golpe de Estado. Dichos actos, altamente positivos en tanto baluartes para consolidar la democracia del país andino y construir memoria histórica a fin de evitar sucesos similares, presentan una problemática. Al igual que en los trabajos y publicaciones referidas al golpe y sus máximos protagonistas y partícipes, advertimos la ausencia respecto al lugar encarado por el TCP y sus miembros.

Las actuaciones judiciales se acumulan mayoritariamente hoy en la llamada causa “Golpe de Estado” (Télam, 2021). En consecuencia, se han visto involucrados la ex presidenta de facto Jeanine Añez, varios ex ministros, militares y policías de alto rango. A éstos se los acusa por delitos de sedición, conspiración y terrorismo. La mayoría de los procesados se hayan cumpliendo actualmente prisión preventiva.

Paralelamente, las masacres de Sacaba y Senkata se encuentran bajo investigación judicial. En este sentido, entre otros tantos, el ex general del ejército boliviano Alfredo Cuéllar fue detenido bajo prisión domiciliaria acusado de asesinato (Página 12, 2020).

Sumado a ello, el ministro de Justicia boliviano Luis Lima adelantó el comienzo de acciones legales contra el Secretario General de la OEA Luis Almagro, personaje clave en la embestida destituyente. Lima calificó a las actuaciones del organismo regional como “persistentes acciones de injerencia” (Página 12, 2021).

No obstante, no aparece en el radar de la búsqueda de justicia la prosecución de juicios políticos a los miembros del TCP involucrados en el nombramiento de Añez. Recordemos que, conforme a los arts. 159 inc. 11 y 160 inc. 6 de la CPE, es competencia de la Cámara de Diputados y de Senadores de Bolivia, acusar y promover, respectivamente, juicio político a los miembros del TCP por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones públicas. La gama de ilícitos podría incluir sedición, conspiración, incumplimiento de los deberes del funcionario público, prevaricato, entre otros, todas figuras previstas en el Código Penal del Estado Plurinacional de Bolivia.

## 6. Conclusiones

La postura asumida por las distintas autoridades a cargo del Estado Plurinacional frente a los responsables de la tragedia ocurrida en 2019 implica un avance de suma importancia en lo que hace al afianzamiento de la democracia e institucionalidad del país andino. Asimismo, es una

respuesta material frente a los reclamos de un pueblo que insta por justicia, verdad y reparación por las múltiples violaciones a los Derechos Humanos acaecidas durante el régimen de facto.

Empero, surge con claridad el escenario disímil que enfrentan los miembros del TCP en comparación a los demás artífices del enclave golpista. No solamente desde el punto de vista procesal y político, sino sobre todo en el ideario colectivo memorial que tiene por tarea narrar lo sucedido en Bolivia en aras de vislumbrar los desafíos actuales y futuros a los que se enfrentan los movimientos nacionales y populares. Dejar de lado el análisis acerca del rol clave ocupado por el último intérprete de la letra de la Constitución implica pasar por alto una demostración más de la problemática que más ha dañado a las democracias en Nuestra América a lo largo de los últimos años. Al mismo tiempo, nos enseña que la conceptualización del lawfare como “(...) el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político” (Vollenweider & Romano, 2017, p. 1), debe ser ampliada a fin de contemplar nuevos escenarios como el ocurrido en el Estado Plurinacional.

Es cierto que en Bolivia los miembros del TCP duran en sus cargos 6 años, no pueden ser reelegidos y son electos por el voto popular ciudadano (arts. 183 y 198 CPE). Se asegura así periodicidad democrática en las funciones públicas y en nuestro caso una depuración natural de los personajes involucrados en los hechos tratados en este trabajo. Independientemente de ello, este punto no soluciona plenamente las apreciaciones marcadas con anterioridad.

Tal vez la cualidad más sofisticada de la *guerra jurídica* sea el de pasar desapercibida, ocultándose bajo el ropaje de la opacidad del Derecho y el blindaje mediático. Poner luz sobre este estado de situación es el primer paso a dar a fin de encontrar soluciones que franqueen los obstáculos que impiden el despliegue y profundización de propuestas ciudadano-gubernamentales populares. El siguiente movimiento será el de encontrar, dentro del paradigma del Estado de Derecho, respuestas estatales y ciudadanas que condenen y pongan fin a las prácticas de *guerra blanda* orquestadas por sectores del aparato comunicacional, político y judicial cuyo objetivo es utilizar la ley y la infamia “(...) como herramienta ofensiva al servicio de los intereses económico-políticos de las minorías dominantes y privilegiadas” (Bielsa & Peretti, 2019, p. 13).

## Referencias Bibliográficas

- Ámbito (Ed.). (14 de noviembre de 2019). *Impiden que el Congreso sesione y se profundiza el golpe en Bolivia*. <https://tinyurl.com/kym6ub6p>
- Arce, L. (22 de octubre de 2019). *Luis Arce: "Estamos indignados con la OEA"*. (López San Miguel, M., Entrevistador). Página 12. <https://tinyurl.com/xvytc6c2>
- Bielsa, R., & Peretti, P. (2019). *Lawfare. Guerra judicial-mediática*. Ariel.
- Borón, A. A. (Ed.). (10 de noviembre de 2019). *El golpe en Bolivia: cinco lecciones*. <https://tinyurl.com/4bzrt9va>



- Carbone, R., & Soler, L. (2017). *Franquismo en Paraguay. Modelo para golpes*. Arandurã.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (10 de diciembre de 2019). *CIDH presenta sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia, y urge una investigación internacional para las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del proceso electoral desde octubre de 2019*. Comunicado de prensa N° 321/19. <https://tinyurl.com/d9rnaj5>
- Constantineau, A. (1945). *Tratado de la doctrina de facto*. Depalma.
- Correa, A.D. (Octubre de 2020). *Crónica de un fiasco mediático en Bolivia*. Le Monde Diplomatique. <https://tinyurl.com/xazwas4k>
- Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. (10 de septiembre de 1930). *Acordada sobre reconocimiento del Gobierno Provisional de la Nación*. Sistema Argentino de Información Jurídica. <https://tinyurl.com/4y92z6wt>
- Curiel, J., & Williams, J.R. (27 de febrero de 2020). *Análisis de las elecciones de Bolivia en 2019*. Centro de Investigación en Economía y Política. <https://tinyurl.com/yeh3peaa>
- Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano. (2019). *Informe Final*. <https://tinyurl.com/9af6z569>
- Echazú Cortéz, C. (28 de abril de 2021). *Las Fuerzas Armadas Bolivianas y el golpe de Estado*. Nodal. <https://tinyurl.com/zfdyvn4d>
- Johnston, J., & Rosnick, D. (11 de junio de 2020). *Observando a los observadores: La OEA y las elecciones bolivianas de 2019*. Centro de Investigación en Economía y Política. <https://tinyurl.com/mudvyevu>
- Morales Ayma, E. (2020). *Volveremos y seremos millones*. Ariel.
- Órgano Electoral Plurinacional. (2015). *Resultados elecciones generales 2015*. Comunicado de prensa. <https://www.oep.org.bo/>
- Página 12 (Ed.). (26 de noviembre de 2020). *Un general del Ejército de Bolivia fue detenido por la masacre de Sacaba*. <https://tinyurl.com/untt6bwr>
- Página 12 (Ed.). (17 de marzo de 2021). *Bolivia le iniciará un juicio a Luis Almagro*. <https://tinyurl.com/yt5tmdys>
- Romano, S., Lajtman, T., García Fernández, A. & Tirado, A. (Noviembre de 2019). *EE. UU. y la construcción del golpe en Bolivia*. Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. <https://tinyurl.com/4raw9h92>
- Télam (Ed.). (13 de marzo de 2021). *Detuvieron a Añez y a varios de sus ministros por el golpe de Estado contra Evo Morales*. <https://tinyurl.com/477vu9mu>
- Teruggi, M. (13 de noviembre de 2019). *Sin quórum, Jeanine Añez se autoproclamó presidenta en La Paz*. Página 12. <https://tinyurl.com/4dy7jmdn>

Tribunal Constitucional Plurinacional. (12 de noviembre de 2019). *Comunicado asunción Jeanine Añez*. <https://tinyurl.com/5ax25v98>

Vollenweider, C. & Romano, S. (2017). *Lawfare. La judicialización de la política en América Latina*. Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. <https://tinyurl.com/ecwfwwb4>

## Contribución de los Autores

Autor	Contribución
Fausto Marchiaro	Concepción y diseño, investigación; metodología, redacción. Revisión del artículo, corrección de estilo. Aportes secundarios y referencias

**Citación/como citar este artículo:** Marchiaro, F. (2021). Guerra jurídica en el golpe de Estado boliviano: una problemática pasada por alto *Nullius*, 2(2), 102-111. DOI: <https://doi.org/10.33936/revistaderechos.v2i2.4080>